

Santiago, veinticuatro de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En estos autos, el Ministro en Visita Extraordinaria, señor Álvaro Mesa Latorre, con fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dicta sentencia definitiva en la cual, en el aspecto penal, absuelve a **HÉCTOR GUILLERMO SEPÚLVEDA CHACÓN** y a **GONZALO HUMBERTO FIGUEROA NIETO**, de ser autores del delito de apremios ilegítimos en la persona de Juan Luis Díaz Cortez.

El mismo fallo condena a **GONZALO HUMBERTO FIGUEROA NIETO**, a la pena de cinco años de reclusión menor en su grado máximo, como autor los delitos de detención ilegal en las personas de Juan Luis Díaz Cortez, Manuel Antonio Humaña Jiménez, Rubén Enrique Leal Riquelme, Renato Ariel Saravia Flores, Baldomero Osvaldo Salazar Salgado, René Esteban Díaz Cortez y Renato Santana Dubreuil. Perpetrados en la comuna de Curarrehue en el mes de septiembre de 1973 y, condena también a **ENRIQUE ALBERTO REBOLLEDO SOTELO**, a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo como autor de los delitos de **Apremios Ilegítimos** en las personas de Manuel Antonio Humaña Jiménez, de Rubén Enrique Leal Riquelme, Renato Ariel Saravia Flores y Baldomero Osvaldo Salazar Salgado. Todos perpetrados en la comuna de Curarrehue, en el mes de octubre de 1973. En ambos casos más las accesorias legales, costas de la causa, ordenando su cumplimiento efectivo.

El mismo fallo, en el plano civil luego de rechazar las excepciones de cosa juzgada, de reparación satisfactiva y de prescripción extintiva, accedió, con costas, a la demanda civil presentada por Rubén Leal Riquelme, por concepto de daño moral producto de los delitos de detención ilegal y apremios



ilegítimos, así como también accedió a la demanda que, por el mismo daño, interpuso Renato Santana Dubreuil, víctima del delito de detención ilegal, deducidas en contra del Fisco de Chile, condenando a este último al pago de \$50.000.000 y \$30.000.00, respectivamente, más reajustes entre el mes anterior a que la sentencia quede ejecutoriada y el mes anterior al de su pago; devengando intereses corrientes por el mismo período.

Impugnada esa decisión, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, aprueba en lo consultado y confirma en lo apelado el referido fallo, sustituyendo las penas corporales impuestas a los sentenciados Figueroa Nieto y Rebolledo Sotelo, por la de libertad vigilada intensiva, por el término de cinco años, quedando sujeto a las condiciones que establecen las letras a) y b) del artículo 17 de la Ley N° 18.216.

Contra esta última sentencia, la defensa del sentenciado Rebolledo Sotelo dedujo recurso de casación en el fondo, el cual se ordenó traer en relación y, estando los autos en estado, ante esta Sala, se procedió a su vista.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la defensa de Enrique Alberto Rebolledo Sotelo, dedujo recurso de casación en el fondo, sustentándolo en la causal del N° 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, denunciando la infracción de los artículos 457 N.º 5 y 6; y 488 N° 1 y 2 primera parte, del Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 1; 15 N ° 1 y 150 N ° 1 del Código Penal, argumentando que no existe medio probatorio que relacione a su representado, de manera fehaciente y directa o indirectamente con el delito de apremios ilegítimos, por el que se lo condenó.

A continuación, y en subsidio, invoca la causal del N°1 del artículo 546 Código de Procedimiento Penal, al respecto señala que no es posible calificar



la participación del Rebolledo Sotelo como autor del delito de apremios ilegítimos, ya que se le condena basado en presunciones judiciales que no son suficientes. En consecuencia, pide anular la sentencia recurrida y, en su lugar, se declare que se le absuelve por falta de participación penal.

SEGUNDO: Que, como un aspecto previo al análisis del recurso, cabe señalar que, en los fallos de instancia han asentado los hechos, en los siguientes términos:

A. Que con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 el retén de carabineros de Curarrehue, se reforzó con contingente de otros destacamentos, quedando al mando del Oficial de Carabineros, el Teniente Gonzalo Humberto Figueroa Nieto, quien inmediatamente y por propia iniciativa, ordenó la detención de civiles del lugar, sin contar para ello con orden alguna emanada de algún tribunal que lo facultara para tal acción.

B. Que don Juan Luis Díaz Cortez, simpatizante del gobierno de la Unidad Popular, fue detenido por personal de Carabineros de Curarrehue el 13 de septiembre de 1973 por orden del Teniente a cargo del retén Gonzalo Humberto Figueroa Nieto. Al llegar a la unidad antes indicada pudo ver que también se encontraban privados de libertad Renato Santana Dubreuil, Luis Cid Hernández y Benito Tapia. Posteriormente todos fueron subidos a una camioneta de propiedad de un civil de nombre Clorindo Mena (Fallecido) y trasladados hasta la Subcomisaría de Carabineros de Pucón para posteriormente ser derivados a la 2° Comisaría de Carabineros de Temuco, donde Juan Luis Díaz Cortez pasó la noche. A la mañana siguiente fue trasladado a la Base Aérea Maquehue, lugar en el que fue interrogado y posteriormente puesto en libertad, pudiendo regresar a Curarrehue al día siguiente.



C. Que el día 17 de septiembre de 1973 Juan Luis Díaz Cortez fue nuevamente detenido por Carabineros de Curarrehue, por orden del Teniente a cargo del retén, Gonzalo Humberto Figueroa Nieto, esta vez junto a su hermano René Díaz Cortez, Manuel Antonio Humaña Jiménez, Rubén Enrique Leal Riquelme, Renato Ariel Saravia Flores, Baldomero Osvaldo Salazar Salgado y otras personas, bajo el cargo de ser “activistas – extremistas”. Posteriormente fueron subidos a un vehículo y trasladados hasta la Subcomisaria de Carabineros de Pucón, para posteriormente, ser derivados al Regimiento Tucapel de Temuco. En ese lugar permanecieron en un gimnasio ubicado en el interior de la unidad militar y tras algunos interrogatorios fueron llevados a la cárcel pública.

D. Que después de 12 días de estar privados de libertad, Manuel Antonio Humaña Jiménez, Rubén Enrique Leal Riquelme, Renato Ariel Saravia Flores, Baldomero Osvaldo Salazar Salgado y otras personas fueron llevadas a declarar ante la Fiscalía Militar de Temuco ubicada hacia el interior del Regimiento Tucapel, siendo liberados días más tarde sin que se les hubiese formulado cargo alguno, por lo que regresaron todos a Curarrehue. Que en el caso de don Juan Luis Díaz Cortez, a fines de septiembre de 1973 fue liberado y decidió regresar a Curarrehue, donde debía presentarse diariamente ante carabineros de esa comuna. En esa unidad policial fue sometido a apremios físicos cada vez que concurrió allí, tales como golpes de pies y puños o con la punta del fusil que portaban los uniformados, quedando su torso y cara muy hinchado y con moretones. En una oportunidad quedó detenido y lo hicieron pelear con otra persona de nombre Pedro Raín (Fallecido), fueron llevados al hall de entrada del retén obligándolos sostener una pelea a mano limpia luego de lo cual fueron dejados en libertad. Ante el hostigamiento sufrido, Díaz



Cortez decidió abandonar Curarrehue, solicitando para aquello un salvoconducto con el objeto de trasladarse a Temuco, situación que ocurrió el 15 de octubre de 1973.

E. Que a principios de octubre de 1973 Manuel Antonio Humaña Jiménez, Rubén Enrique Leal Riquelme, Renato Ariel Saravia Flores y Baldomero Osvaldo Salazar Salgado, fueron nuevamente detenidos, esta vez por personal de la Fuerza Aérea de Chile, quienes en un número de entre 4 a 5 efectivos se apersonaron en el colegio donde trabajan los profesores aludidos y conducirlos a pie hasta el Retén de Carabineros de Curarrehue, donde procedieron a amarrarles las manos y vendarles la vista. Acto seguido fueron llevados al interior de las caballerizas de esa unidad policial.

F. Que una vez ingresados a la dependencia antes señalada, donde había más personas detenidas tiradas en el piso, las víctimas de autos fueron sometidas a interrogatorios y torturas consistentes en golpes de pies y puños, culatazos en el estómago y otras vejaciones tales como hacer que algunos de ellos se desnudaran y cantaran simulando tener una guitarra en la mano, además de apretarles los testículos con las manos.

G. Que durante los interrogatorios Manuel Antonio Humaña Jiménez reconoció la voz de uno de sus celadores como la de un cabo de la Base Aérea Maquehue, Mecánico Tripulante de Helicópteros, quien había mantenido una relación amorosa tiempo atrás con una cuñada de Manuel Humaña, se trataba del entonces Cabo Enrique Alberto Rebolledo Sotelo, y que además había estado en Curarrehue durante el verano junto al Capitán Benjamín Fernández Hernández de la FACH, quienes se quedaron por algún tiempo en la escuela que estaba bajo su dirección. El cabo Enrique Alberto Rebolledo Sotelo, antes aludido en un momento determinado en que otro integrante del



grupo de torturadores quiso disparar en contra de Humaña tomó del brazo a la víctima y lo sacó del lugar diciéndole al oído “no se preocupe porque va con un amigo”, prueba fehaciente del lazo que los unía.

H. Que al día siguiente, la esposa de Manuel Antonio Humaña Jiménez, enterada de la presencia en el lugar del Capitán Benjamín Fernández Hernández, intercedió ante este por los detenidos, tras lo cual todos fueron liberados.

TERCERO: Que, los hechos descritos, a juicio del sentenciador de la instancia, son constitutivos de los delitos de detención ilegal de Juan Luis Díaz Cortez, de Manuel Antonio Humaña Jiménez, de Rubén Enrique Leal Riquelme, de Renato Ariel Saravia Flores, de Baldomero Osvaldo Salazar Salgado, de René Esteban Díaz Cortez y de Renato Santana Dubreuil, previsto y sancionado en el artículo 148 del Código Penal vigente a la época de los hechos y del delito de apremios ilegítimos Juan Luis Díaz Cortez, de Manuel Antonio Humaña Jiménez, Rubén Enrique Leal Riquelme, Renato Ariel Saravia Flores y Baldomero Osvaldo Salazar Salgado, previsto y sancionado en el artículo 150 N° 1, del Código Penal, ambos en grado consumado y en carácter de lesa humanidad, aspecto que se mantuvo en la revisión ejecutada por el Tribunal de Alzada.

CUARTO: Que, el recurso en análisis esgrime —en rigor— en un mismo capítulo y de manera conjunta las causales séptima y primera del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, vicios de nulidad que se configurarían al habersele condenado como autor del delito de secuestro calificado, en los términos previstos en el artículo 15 del Código Penal, en circunstancias que la prueba no cumple lo previsto en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, por lo que debió ser absuelto por falta de participación en el ilícito.



Como se observa, la infracción del N° 1 de la norma ya citada, supone necesariamente que los hechos fueron correctamente establecidos y que los mismos resultan constitutivos de delito, para sostener igualmente la causal prevista en el 546 N° 7, esto es, haberse violado las leyes reguladoras de la prueba, desconociendo los hechos asentados por el juzgador, que —por el contrario— los acepta al esgrimir el primer motivo de invalidación.

Como se ve, cada postulado supone el abandono de la tesis anterior, condiciones en las que el arbitrio no puede ser atendido, porque no cabe dejar subordinada la efectividad de unos vicios a la existencia o inexistencia de otros, desatendiéndose la ritualidad que es propia de este recurso de derecho estricto, el que, por tal motivo, será rechazado (SCS N° 19.165-17, de 27 de septiembre de 2017 y N° 35.788 de 20 de septiembre de 2018; 13877-2019, de 24 de diciembre de 2021; 12820-2019 de 8 de noviembre de 2021).

En efecto, los vicios que constituyen las hipótesis invocadas no pueden proponerse en forma simultánea, pues ello importa que, ante la pluralidad, sea este Tribunal quien opte por alguno de los motivos de nulidad, función que inequívocamente no le corresponde a la Corte, motivos por los cuales el recurso no puede prosperar.

QUINTO: Que, sin perjuicio del defecto insalvable del recurso, conviene aclarar que —a diferencia de lo alegado—, los elementos del ilícito examinado y la participación en ellos del acusado, se estimaron verificados por el tribunal de primera instancia, lo que fue ratificado por el de segunda, conclusión que esta Corte comparte, teniendo para ello en especial consideración que las declaraciones de los testigos se refieren a Rebolledo Sotelo como parte integrante de un grupo denominado “chicos malos”, los que supuestamente se dedicarían a realizar allanamientos y detenciones de personas, lo que se suma



a lo señalado por Manuel Humaña Jiménez, víctima de estos hechos, el que en su declaración refirió haber conocido al sentenciado con anterioridad a los hechos y haber reconocido su voz, como la de uno de sus captores.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, 767 y 772 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo, interpuesto por el abogado Jorge Balmaceda Morales, en representación del sentenciado Enrique Alberto Rebolledo Sotelo, contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, la que no es nula.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Gandulfo.

Rol N° 80.588-2023.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R. y los Abogados Integrantes Sra. Pía Tavorari G. y Sr. Eduardo Gandulfo R. No firma la Ministra Sra. Letelier, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar con permiso. Santiago, 24 de junio de 2025.



En Santiago, a veinticuatro de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

